SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 12/2013

Recomendación N°	12/2013
Autoridades Responsables	SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ
Expediente	3VQ-0075/2012, (acumulados) 3VQU-0078/12 y 3VQU-0080/12
Fecha de emisión/	12 DE JULIO DE 2013
HECHOS	
<p>El 16 de octubre de 2012, aproximadamente a las 05:00 horas en el Centro Estatal de Reinserción Social de San Luis Potosí, V1 fue privado de la vida con motivo de una lesión producida por proyectil de arma de fuego, y otros 16 reclusos resultaron lesionados durante un operativo en el que participaron agentes de Seguridad Pública del Estado, de la policía Municipal de San Luis Potosí, del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, así como elementos de Seguridad y Custodia del citado establecimiento penitenciario. Los citados agentes de policía, conjuntamente con los elementos de seguridad y custodia del Centro de Reclusión, llevaron a cabo una revisión de manera simultánea en los dormitorios 1, 2, 3, 4, 5, 6, así como en el área de Nuevo Ingreso del mencionado establecimiento, y al momento de la verificación en las estancias, diversos reclusos protestaron y los agredieron con palos, tubos y pedacera de concreto; en respuesta realizaron disparos con las armas de fuego que portaban.</p> <p>De acuerdo con el Subdirector de Seguridad y Custodia, a esa hora un grupo de internos “lanzaban piedras” en el área de dormitorios, situación que se fue generalizando y rebasó la seguridad interna, por lo que activó el botón de pánico del equipo de radio comunicación, y 25 minutos más tarde arribaron al Centro Penitenciario elementos de distintas instituciones policiacas, quienes a las 05:45 horas, ingresaron para controlar la situación, controlando la situación violenta a las 06:40 horas.</p> <p>Por su parte los internos V2, V3, V4, V5, V7, V8, V9, V10 y V11, a su vez señalaron que el día de los hechos se encontraban dormidos en sus estancias, cuando entre las 04:00 y 05:00 horas ingresaron armados, agentes de Seguridad Pública Estatal, a realizar un cateo; en determinado momento accionaron sus armas, privando de la vida V1, recluso que se encontraba ubicado en el dormitorio número 1.</p> <p>Por los hechos antes descritos, la Procuraduría General de Justicia del Estado, inició la Averiguación Previa 1, la cual fue turnada a la Unidad Especializada en Delitos de Alto Impacto, radicándose la Averiguación Previa 2, sin que se hayan realizado las diligencias necesarias para el ejercicio de la acción penal.</p> <p>Esta Comisión Estatal recopiló documentos, llevó a cabo inspecciones y recabó entrevistas a personas víctimas y testigos relacionados con los hechos, se agregaron informes de autoridades, constancias y declaraciones, cuya valoración es objeto de análisis en el capítulo de observaciones de la presente recomendación.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ A la vida ✓ A la integridad personal

Derechos Vulnerados	✓ Derecho de Acceso a la Justicia.
OBSERVACIONES	
<p>Esta esta Comisión Estatal no se opone a las tareas que realizan las autoridades para el control de la seguridad interna de los Centros Penitenciarios, sino a que con motivo de esas acciones se contravenga el marco normativo nacional e internacional de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Es tarea fundamental del Estado garantizar la protección de la vida, la salud y la integridad física y mental de las personas privadas de libertad, así como del personal que labora en los Centros de Reclusión, sin que ello sea menoscabo para atender todos los requerimientos relacionados con la seguridad interna de las prisiones.</p> <p>Del análisis lógico-jurídico realizado, se observó que se vulneraron los derechos humanos a la vida y a la integridad personal en agravio de 17 víctimas reclusas, como consecuencia de las lesiones causadas por proyectiles disparados de armas de fuego, así como el derecho de Acceso a la Justicia tanto de las víctimas como de los agentes de seguridad pública AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR10, AR11, AR12, AR13, AR14, AR15, AR16, AR17, AR18, AR19, AR20 y AR21 en razón de que no se ha garantizado la debida Procuración de Justicia en la Averiguación Previa 2.</p> <p>El 16 de octubre de 2012, 190 agentes de Seguridad Pública del Estado, 138 elementos de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, 40 agentes municipales de Soledad de Graciano Sánchez y elementos de Seguridad y Custodia, llevaron a cabo un operativo en el Centro Estatal de Reinserción Social de San Luis Potosí, con el propósito de practicar una revisión en los dormitorios de los internos.</p> <p>No obstante los informes de autoridad, de la evidencia que se recabó se advirtió que los agentes de Seguridad Pública del Estado, y del municipio de San Luis Potosí, fueron concentrados horas antes de los hechos, con el propósito de llevar a cabo revisiones en los seis dormitorios y en el área de nuevo ingreso.</p> <p>Los agentes de policía al efectuar la revisión en diversos dormitorios al Centro Penitenciario y al no cerrarse debidamente algunas secciones de los mismos, permitió que los internos se agruparan y en determinado momento confrontaran a los policías, lo cual generó como resultado la privación de la vida de V1, así como 16 reclusos y 18 policías lesionados.</p> <p>La evidencia permite observar que todos los agraviados sufrieron lesiones producidas por proyectiles disparados por arma de fuego. Circunstancia que se constató con todas las certificaciones médicas de las cuales se advierte que V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V16 y V17, presentaron lesiones producidas por proyectiles disparados por armas de fuego.</p> <p>Es importante señalar, que a consecuencia de la lesión que presentó V10, se encuentra en tratamiento médico y requiere constantemente de material para curaciones y medicamento. Por su parte, V3, V6, V8 y V13, señalaron que presentan secuelas de las lesiones ocasionadas y necesitan rehabilitación.</p> <p>Por lo expuesto, se evidenció que en el caso existió un uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos de seguridad que intervinieron en los hechos, ya que todos los reclusos presentaron lesiones producidas por</p>	

proyectiles de arma de fuego, es decir, no se encontraron datos de que se hayan agotado otros medios para controlar la manifestación violenta que presentó un sector de la población penitenciaria.

Sobre este particular, el derecho internacional de los derechos humanos señala que el uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos de seguridad está definido por la excepcionalidad, aunado a que debe ser planeado y limitado de manera proporcional dependiendo cada caso. Sin embargo, en el presente caso no aconteció ya que no se aportaron datos en el sentido de que la autoridad haya agotado otros medios de intervención para controlar la manifestación violenta de los reclusos, antes de proceder a utilizar las armas de fuego.

Las autoridades señaladas como probables responsables no proporcionaron evidencia para acreditar que contarán con capacitación o protocolos para atender contingencias al interior de los Centros Penitenciarios. En razón de lo anterior, la actuación de los elementos de policía que participaron en los hechos, fue contraria a los principios internacionales que establece el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, así como de los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios encargados de Hacer Cumplir la Ley, en los cuales se dispone que el uso de la fuerza se justificará cuando sea estrictamente necesaria, en la medida que lo requieran las circunstancias, incluso, utilizar en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza.

Si bien es cierto que es atribución del estado garantizar la seguridad interna de los centros penitenciarios, también lo es que su actuación debe estar acorde con el respeto de los derechos humanos. En este sentido, la Corte Interamericana, en el caso *Montero Aranguren y otros Vs. Venezuela*, sentencia de 5 de julio de 2006, párrafo 70, precisó que se reconoce la facultad del Estado de garantizar la seguridad y mantener el orden dentro de las cárceles, donde el tráfico de armas y drogas, la formación de bandas y la subcultura de violencia, requieren del constante resguardo de la seguridad y vida de los internos y funcionarios que allí trabajan; sin embargo, no puede exceder el uso de la fuerza con consecuencias letales, justificando su actuar en la sola existencia de la situación antes descrita.

En razón de lo anterior y tomando en consideración que las personas privadas de la libertad están en una situación de vulnerabilidad, la actividad gubernamental está limitada al estricto respeto de los derechos humanos. Por lo tanto, quienes se hallan en establecimientos creados para ese fin no pierden por ese hecho su calidad o condición de ser humano, pues únicamente se encuentran sujetos a un régimen jurídico particular que suspende determinados derechos como la libertad ambulatoria, sin que ello signifique la suspensión o anulación de la titularidad de sus demás derechos fundamentales, como son la vida y la integridad personal.

Las conductas realizadas por las autoridades responsables en la que se vulneró el derecho a la vida de V1, son contrarias a diversos instrumentos internacionales que son considerados norma vigente en nuestro país en términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que destacan los artículos 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y I, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en los cuales se reconoce el derecho de toda persona a que se respete su vida y que nadie puede ser privado arbitrariamente.

Respecto al derecho humano a la integridad y seguridad corporal en agravio de las víctimas, las autoridades responsables vulneraron los artículos 1, párrafo 1, 14, párrafo segundo, 21 párrafo noveno, y 22 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 5, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en términos generales refieren que todas las personas gozarán de los derechos humanos, que nadie podrá ser privado de sus derechos, que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad y seguridad corporal, y que nadie podrá ser sometido a maltratos físicos ni psicológicos, y que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Es necesario que se lleve a cabo una investigación administrativa y prosiga la penal respecto de los hechos en el que perdiera la vida V1, con el propósito de deslindar responsabilidades, que se indague si los elementos de Seguridad y Custodia dejaron abiertos las secciones de los dormitorios 4, 5 y 6, lo cual permitió que se agruparan los internos y lesionaran principalmente a policías de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí y de Seguridad Pública del Estado. Asimismo, es indispensable que se investigue a los internos que participaron en las agresiones contra los servidores públicos.

Se observó que existió una irregular integración de la Averiguación Previa por parte de AR24, agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Mesa I Central mismo que turnó las diligencias iniciales a AR25, agente especializado adscrito a la Mesa V de la Unidad Especializada de Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, el 22 de febrero de 2012, iniciándose la Averiguación Previa 2. En el caso, se advirtió que no se llevaron a cabo las diversas diligencias necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos como base para determinar la procedencia del ejercicio de la acción penal.

De la revisión que se practicó a los constancias que integran las citadas indagatorias penales, se desprende que una de las primeras diligencias a cargo AR24, el 16 de octubre de 2012, junto con personal de Servicios Periciales y Criminalística, fue proceder al levantamiento del cadáver; sin embargo, de los datos obtenidos no se advierte que haya llevado a cabo la inspección del lugar de los hechos, ni que hayan recopilado datos o indicios de la escena donde falleció V1. Cabe señalar que el 16 de octubre de 2012, AR24, ordenó la práctica de pruebas de rodizonato de sodio a las personas lesionadas, que incluyó internos y servidores públicos; sin embargo, ni se encontraron constancias de que se haya practicado a todos y cada uno de los elementos de las corporaciones que intervinieron en los hechos.

Se observó también que AR25, hasta el 12 de febrero de 2013, solicitó a la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí y Seguridad Pública del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, un informe sobre su intervención en el CERESO "LA PILA", es decir que trascurrieron casi 4 cuatro meses desde que ocurrieron los hechos, sin llevar a cabo las acciones pertinentes para conocer los nombres de los agentes que intervinieron, las armas que portaban, o en su caso, la práctica de estudios de balística pertinentes en el caso. Se advirtió que tampoco se tuvo especial cuidado en el manejo del material probatorio, particularmente en el casquillo percutido 9 milímetros deformado, mismo que fue embalado por la médico legista cuando practicó la autopsia a V1, ya que no hay constancia de que se remitieran para análisis y estudio al Departamento de Servicios Periciales, por lo que la autoridad ministerial no

adoptó las medidas razonables para asegurar el material probatorio necesario para llevar a cabo la investigación. Quedó en evidencia que las omisiones de AR24 y AR25, fueron de tal grado que no documentaron las lesiones que presentaron las víctimas V12, V13, V14, V15, V16, V17, que son esenciales en las primeras investigaciones para la acreditación de las lesiones que, de acuerdo a las evidencias recabadas, fueron producidas por proyectiles de arma de fuego, así como la certificación de los servidores públicos AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR19, AR20, y AR21, quienes también fueron afectados en su integridad personal.

En relación con la escena del crimen, los estándares internacionales del Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, mejor conocido como Protocolo de Minnesota, señalan que como mínimo se debe fotografiar el lugar del evento y cualquier otra evidencia física, recoger y conservar todas las muestras de sangre, cabello, fibras, hilos u otras pistas; examinar el área en busca de huellas o cualquier otra que tenga naturaleza de evidencia, y hacer un informe detallando cualquier observación de la escena que pueda ser útil para la investigación, circunstancia que fue omitida por parte de los servidores públicos encargados de las Averiguaciones Previas 1 y 2. El citado Protocolo de Minnesota también señala que la debida diligencia en una investigación de una muerte exige el mantenimiento de la cadena de custodia de todo elemento de prueba forense. Esto significa, en la práctica, que se debe llevar un registro preciso de las evidencias y datos encontrados, para documentar la historia del elemento de prueba. La cadena de custodia es fundamental para documentar y sustentar toda acusación, de ahí la importancia de que desde las primeras investigaciones no existan omisiones y se aseguren los datos que puedan ser útiles para el proceso penal, lo que en el caso no ocurrió. La evidencia que se recabó, permite advertir que AR24 y AR25, agentes del Ministerio Público a cargo de la integración de las Averiguaciones Previas 1 y 2, incurrieron en omisiones dentro de la investigación de lo ocurrido en el CERESO LA PILA el 16 de octubre de 2012, tanto en la recopilación y custodia de pruebas, como para recabar la información, testimonios o declaración de los participantes en el suceso. Estas omisiones, aparte de perjudicar la investigación de los hechos, generan impunidad.

Los agentes del Ministerio Público que tuvieron a su cargo la investigación de los hechos, han vulnerado el derecho a la verdad en agravio de las víctimas, sobre todo para conocer el resultado de la investigación efectiva y el deslinde de responsabilidades. Cabe destacar que la carencia de una investigación completa y efectiva sobre los hechos constituye una fuente de sufrimiento y angustia adicional para las víctimas y sus familiares, quienes tienen el derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, teniendo presente que para asegurar el derecho al acceso a la justicia, la indagación penal debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad.

Este Organismo protector de los derechos humanos, considera que en todos los casos de uso de la fuerza pública que hayan provocado la pérdida de la vida o producido lesiones a una o más personas, el Estado tiene el deber de dar una respuesta satisfactoria y convincente de lo sucedido, a través de la investigación efectiva del caso, sobre todo deslindar las responsabilidades que correspondan, sancionar la violación a derechos humanos y reparar el daño a las víctimas.

El irregular tramite de las Averiguaciones Previas y la falta de determinación oportuna, afecta el derecho humano al acceso a la justicia porque obstaculiza la procuración y consecuentemente la impartición de justicia, y a su vez, genera incertidumbre sobre la aplicación de la ley y el castigo hacia los probables responsables. En este sentido, se observó que AR24 y AR25, Agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, encargados de la integración de la Averiguación Previa 1 y 2, se apartaron de lo dispuesto en

los artículos 17, párrafo segundo y 21, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Omitieron observar los artículos 6, 7, 8, 10, 11 y 15, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí, y 3, fracciones II y V; 154 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, 56 y 60 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que en términos generales, disponen que los agentes del Ministerio Público observarán los principios de unidad de actuación, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; que deben dictar todas las medidas para impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho delictuoso; practicar y ordenar todos los actos conducentes a la comprobación de los elementos del tipo penal y demostrar la probable responsabilidad. Se apartaron de lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 7, 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; II, XVII y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 4 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos de abusos de Poder, que establecen los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y acceso a la Justicia para que toda persona pueda acudir a los Tribunales para hacer valer sus derechos.

Las conductas que desplegaron los agentes de Seguridad y Agentes del Ministerio Público pueden ser constitutivas de responsabilidad administrativa, de conformidad con el artículo 56, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Es importante que las autoridades formen y capaciten a los miembros de sus cuerpos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido, aún bajo los estados de excepción, el uso de las armas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la actuación irregular, consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, también lo es que el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero, y 113, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 de la Ley General de Víctimas, y 7, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, los que establecen la posibilidad de que al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público, la recomendación que se formule debe incluir medidas para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos humanos y las relativas a la reparación de los daños que se hubieran ocasionado, en concordancia con el contenido de la Ley General de Víctimas.

RECOMENDACIONES

Secretario de Seguridad Pública del Estado:

PRIMERA. Se repare el daño en favor de los familiares de V1, o de quien acredite tener derecho, que se traduzca en una compensación justa y equitativa.

SEGUNDA. Se repare el daño ocasionado a los agraviados de V2 a V17, así como a los agentes de policía AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6, el cual incluya la atención médica y psicológica necesaria que permita restablecer su salud física y emocional.

TERCERA. Se inicie procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos.

CUARTA. Que los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, reciban capacitación y adiestramiento sobre el uso de la fuerza pública y el empleo de armas de fuego, con especial atención en el respeto a los derechos humanos, así como a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego, así como las técnicas para revisar e inspeccionar centros de reclusión, enviando las constancias de cumplimiento.

QUINTA. Se colabore ampliamente en la integración de la Averiguación Previa 2, que se sigue ante la Agencia del Ministerio Público Mesa Cinco Especializada en Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia en el Estado.

Procurador General de Justicia del Estado:

PRIMERA. Se practiquen las diligencias necesarias e indispensables para integrar en debida forma la Averiguación previa 2, radicada en la Agencia del Ministerio Público Mesa Cinco Especializada en Delitos de Alto Impacto, y en su oportunidad se determine conforme a derecho sobre la procedencia del ejercicio de la acción penal.

SEGUNDA. Se inicie una investigación de los hechos, y de ser el caso, se turne al órgano de control competente, para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudieron haber incurrido los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Mesa I Central y a la Mesa V Especializada en Delitos de Alto Impacto.

TERCERA. Se diseñe y aplique a los Agentes del Ministerio público, un programa de capacitación sobre la debida investigación con el fin de que cuenten con elementos legales, técnicos y científicos necesarios para la preservación de la escena de los hechos, el manejo y preservación de las evidencias y cadena de custodia, así como la valoración de todos los elementos que puedan ser útiles para efectiva resolución de las indagatorias.

Director General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí:

PRIMERA. Se repare el daño en favor de los agentes AR10 a AR21, consistentes en la atención médica y psicológica necesaria que permita restablecer su salud física y emocional.

SEGUNDA. Se de vista a la Subdirección de Inspección General y Asuntos Internos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, a efecto que se inicie procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos.

TERCERA. Se colabore ampliamente en la integración de la Averiguación Previa 2, que se sigue ante la Agencia del Ministerio Público Mesa Cinco Especializada en Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, proporcionando al efecto la información que le sea requerida, remitiendo a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento.

CUARTA. Que agentes de seguridad pública municipal a su cargo, reciban capacitación y adiestramiento sobre el uso de la fuerza pública y el empleo de armas de fuego, con especial atención en el respeto a los derechos humanos, así como a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego.

Director General de Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez:

PRIMERA. Se inicie procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos.

SEGUNDA. Se colabore ampliamente en la integración de la Averiguación Previa 2, que se sigue ante la Agencia del Ministerio Público Mesa Cinco Especializada en Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia en el Estado.

TERCERA. Que agentes de seguridad pública municipal a su cargo, reciban capacitación y adiestramiento sobre el uso de la fuerza pública y el empleo de armas de fuego, con especial atención en el respeto a los derechos humanos, así como a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego.